



**Consejo General de la Abogacía
Española**
Gabinete de Prensa

SEGUIMIENTO DE PRENSA



Resumen de:

**24 de Agosto de 2006
Resumen General**



RESUMEN GENERAL

Los abogados alemanes pierden la exclusividad en la asesoría legal
EL ECONOMISTA

Conde-Pumpido asegura que “no hay base suficiente” para prohibir la marcha ABC

El fiscal de Valladolid estudia si la excarcelación de Vera cumple todos los requisitos
ABC

La CE rehúsa investigar el ‘caso Afinsa y Fórum’ CINCO DÍAS

Solo el 4,5% de los inmigrantes que llegan a España lo hacen en cayucos
EL PERIÓDICO

Las autonomías negociarán el reparto de 700 menores acogidos en Canarias EL PAÍS

El juicio contra Sadam Husein continuará el 11 de septiembre EL MUNDO

Los abogados alemanes pierden la exclusividad en la asesoría legal

■ Los abogados alemanes perderán la exclusividad en asesoría legal, ya que la nueva ley de servicios legales abrirá estas actividades a otras profesiones, como arquitectos, ingenieros de la construcción, mecánicos de vehículos o empleados de banca, según informaba ayer el rotativo alemán, *Frankfurter Allgemeine Zeitung*.

Conde-Pumpido asegura que «no hay base suficiente» para prohibir la marcha

La Fiscalía se basa en los informes policiales, que no ven «vínculos» con Batasuna

● El Partido Popular eleva a ocho el número de convocantes relacionados con la formación ilegalizada y acusa al fiscal general de actuar con «criterio político»

ABC / N. C.

SANTANDER/MADRID. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, respaldó ayer la decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de no oponerse a la celebración de la manifestación convocada en Bilbao para mañana porque, dijo, «después de examinar los informes que actualmente existen» y «de acuerdo con los criterios de legalidad», «no hay base suficiente para la prohibición».

Conde-Pumpido se refería a los informes elaborados tanto por la Policía como por la Ertzaintza, ambos en manos ya de la Audiencia Nacional y ambos coincidentes en sus conclusiones: no hay datos que permitan afirmar que existen «vínculos» entre la manifestación y la ilegalizada Batasuna.

Según fuentes jurídicas, la Policía concreta que no se ha detectado entre los 38 convocantes «la presencia de miembros de la "mesa nacional" ni de ningún responsable de la formación ilegalizada» y que tampoco se ha apreciado «la utilización de cartelera» propia de Batasuna, lo que lleva a concluir que no existen vínculos entre el partido ilegal y la convocatoria.

La Policía sí identifica a tres de los convocantes —cifra que se elevaría a ocho, según ha denunciado el Partido Popular— como ex candidatos a las elecciones municipales por Euskal Herriarrrok (ilegalizada como Batasuna) y Herria Aurrera. Sin embargo, no cree que sea motivo suficiente para intervenir puesto que no exhibieron símbolo político alguno.

La misma pauta que en San Sebastián

A la vista de estos informes, la Fiscalía tiene previsto mantener ante el juez Santiago Pedraz —encargado del sumario de Batasuna durante las vacaciones estivales de Baltasar Garzón— su criterio de no oponerse a la celebración de la manifestación y de solicitar su prohibición o suspensión en el momento en el que se haga exhibición de algún símbolo de Batasuna o se profieran gritos a favor de esta formación ilegal. Es decir, seguir la pauta que se marcó con la marcha celebrada en San Sebastián hace dos semanas.

El fiscal ya se pronunció en este sentido al ser requerido por otro juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, a quien, por encontrarse de guardia la semana pasada, correspondió resolver la petición de varias asociaciones contra la autorización administrativa de la marcha por el Gobierno vasco.

Ayer mismo, Del Olmo dictó una resolución en la que se abstuvo de pro-



EUSKAL
ETA IHEC PR

Los familiares de presos etarras arremetieron ayer contra la política de Zapatero EFE

«Que acerquen los presos a Euskal Herria»

El colectivo de familiares de presos de ETA Etxerat exigió ayer al Gobierno que abandone su política penitenciaria y «acerque a los presos a Euskal Herria para que posteriormente vayan a sus casas». Argitxu Martínez y Jabier Zubimendi leyeron un comunica-

do en euskera y castellano, respectivamente, en una comparecencia en San Sebastián en la que declinaron evaluar las informaciones que aseguran que el Gobierno ha descartado aplicar modificaciones penitenciarias, como el acercamiento de presos, si no se produce

la legalización de Batasuna. Los portavoces señalaron que les «parece bien» que los partidos políticos hagan declaraciones sobre el denominado «proceso», pero les pidieron que «hablen más» del hecho de que se aplica «un plus de castigo a los presos políticos vascos».

nunciarse contra la decisión del Ejecutivo autonómico, aunque de acuerdo con lo que le pidió el fiscal solicitó a la Ertzaintza que le mantenga informado de si se produce antes o durante la manifestación cualquier incidente relacionado con Batasuna.

Ante la situación excepcional de que dos jueces de la Audiencia Nacional estén actuando de forma paralela sobre un mismo hecho, la Fiscalía tiene previsto solicitar que las diligencias abiertas por Del Olmo se incorporen a la causa de Batasuna.

La actuación de la Fiscalía ha recibido duras críticas desde el Partido Popular, cuyo presidente en Vizcaya, Antonio Basagoiti, aseguró ayer que si Conde-Pumpido no actúa es porque tiene «un alto desconocimiento de la realidad o se está vendando los ojos». En

opinión de Basagoiti, la Fiscalía demuestra «estar dirigida políticamente por el Partido Socialista y por el Gobierno de Zapatero». El dirigente popular también se refirió al Ejecutivo vasco al asegurar que le parece «mentira que dentro de esa foto de 40 personas [los convocantes] no sea capaz de encontrar a nadie de Batasuna».

Ayer mismo, el secretario de Economía y Empleo del PP, Miguel Arias Cañete, aseguró que son ocho los convocantes ligados a Batasuna, por lo que censuró lo que considera «pasividad» de la Fiscalía.

Por otra parte, el PNV pidió ayer que Batasuna vuelva a la legalidad y participe en el proceso de negociación con ETA, por lo que reclamó que se derogue la ley de Partidos o que se haga de ella una interpretación «flexible».

El fiscal de Valladolid estudia si la excarcelación de Vera cumple todos los requisitos

EFE

SANTANDER. La Fiscalía de Valladolid está analizando si concurren o no los requisitos para que el ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera, condenado a siete años de cárcel por malversar fondos públicos, goce ya del tercer grado penitenciario. Así lo explicó ayer desde Santander el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, quien aseguró que la Fiscalía recurrirá si no se ha cumplido con la ley. La Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha concedido, a propuesta de la Junta de Tratamiento de la prisión de Segovia, el tercer grado a Vera, que cumplía su condena desde el 16 de febrero de 2005.

«Creo que ha quedado perfectamente demostrado que cuando la Fiscalía ha estimado procedente recurrir ha recurrido, y cuando ha considerado que legalmente no había motivo para ello, no ha recurrido», aseguró el fiscal general.

«Escandaloso», según el PP

Partidario del recurso se ha mostrado el Partido Popular, en cuya opinión es «escandaloso» que la progresión de grado cuente con el beneplácito último del titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que era ministro en los gobiernos socialistas en los que Vera ocupaba un alto cargo.

Tras preguntarse si este beneficio penitenciario es «un pago» por el «silencio» del ex secretario de Estado, los populares anuncian que pedirán explicaciones en el Congreso, informa Ep.

También el PNV, a través de su diputado en el Congreso Emilio Olabarriá, aseguró que se plantea pedir explicaciones en la Cámara Baja y denunció que ninguno de los implicados en la «guerra sucia» y en el «caso de los fondos reservados» cumple su condena en prisión y que por ello es necesario que el actual Gobierno explique por qué.

La CE rehúsa investigar el 'caso Afinsa y Fórum'

CINCO DÍAS *Madrid*

La Comisión Europea descartó ayer emprender ninguna investigación sobre la presunta estafa filatélica cometida por las sociedades Afinsa y Fórum Filatélico. Según el organismo comunitario, en este caso no se cumplen las condiciones para infringir la ley comunitaria de valores. Por lo tanto, la Comisión asume que la investigación recae sobre la competencia judicial española a pesar de que los afectados son ciudadanos de distintos países de la UE.

De esta manera, el comisario de Justicia, Libertad y Seguridad, Franco Frattini, respondió a la pregunta del eurodiputado del PSOE, Antolín Sánchez Presedo. El delegado socialista preguntó a Frattini si Bruselas tiene conocimiento de una estafa que podría haber afectado a "más de 350.000 ciudadanos de la UE" y si piensa tomar alguna medida al respecto.

Frattini respondió que efectivamente la Comisión tiene conocimiento de lo sucedido y que se habían puesto en contacto con las autoridades españolas. No obstante, por lo que respecta a

CRÓNICA DE ADICAE
El presidente de Adicac, Manuel Pardos, instó al ex presidente de Fórum Filatélico, Francisco Briones, a presentar su plan de viabilidad en el juzgado en lugar de anunciarlo en la prensa. "Con esto, lo único que pretenden es ganar tiempo", afirmó.

una eventual dimensión comunitaria del delito, Frattini explicó que el caso de la estafa filatélica "no reúne ninguno de los dos requisitos que contempla la legislación comunitaria" para intervenir y que, por lo tanto, "el asunto recae dentro de las competencias del Estado miembro", España.

El comisario de Justicia señaló que los esquemas de inversión sólo son regulados por la legislación de la Comisión "si son esquemas de inversiones colectivas y si tienen relación con valores transferibles". Frattini puntualizó que los delitos que se imputan a Afinsa y Fórum Filatélico "son por transacciones de sellos, no inversiones en valores transferibles" con lo que quedan excluidos.

TEMA DEL DÍA Páginas 2 a 4

TORMENTA POLÍTICA POR LOS 'SIN PAPELES'

Solo el 4,5% de los inmigrantes que llegan a España lo hacen en cayucos

La mayoría de extranjeros no entran por Canarias sino por Barajas y por la frontera con Francia || Los sindicatos policiales aseguran que 18.000 africanos han sido trasladados a la Península

ANTONIO BAQUERO / BARCELONA
OLGA PEREDA / MADRID

Pese a la conmoción que generan las imágenes de la llegada incesante de cayucos cargados de subsaharianos, esta oleada apenas tiene peso en el cómputo global de los inmigrantes que cada año entran en España. Los 18.313 subsaharianos llegados a Canarias a bordo de esas embarcaciones en lo que va de año solo suponen el 4,5% del total de 601.000 inmigrantes que, desde el 2001, se calcula que de media entran cada año en territorio español.

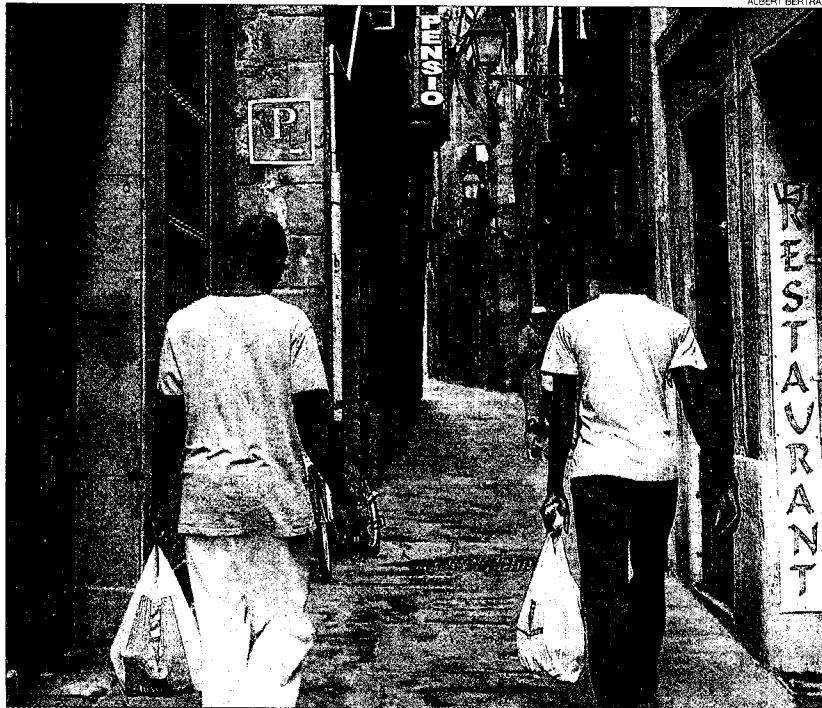
Eso sí, esta tasa es superior a años anteriores. El año pasado, a Canarias solo llegaron 4.500 subsaharianos en patera o cayuco, apenas el 0,7% de los extranjeros que llegaron durante ese año a España.

En Catalunya, la repercusión del traslado de subsaharianos llegados a Canarias es aún menor. Los 800 subsaharianos que han llegado en lo que va de año apenas suponen el 0,3% de los 200.000 inmigrantes sin papeles que la Administración, las oenegés y los sindicatos coinciden en que residen en Catalunya.

MADRID Y FRANCIA // El secretario de inmigración de CCOO, Gassán Saliba, insistió en que «el peso de las llegadas en cayuco es insignificante». «En este país, la inmigración indocumentada entra sobre todo a través del aeropuerto de Barajas y de la frontera con Francia», comentó este responsable sindical que, a modo de ejemplo, señaló que en lo que va de año han llegado a Catalunya unos 12.000 inmigrantes bolivianos.

Todos ellos vienen en avión hasta España, pues no se les exige visado de entrada en la UE. Los inmigrantes se presentan como turistas y siempre que vengan con billete de vuelta, una cantidad de euros en efectivo y una reserva de hotel, la policía de fronteras les deja pasar.

La otra gran entrada a España son los puntos fronterizos por Francia, sobre todo La Jonquera y Hendaya. Por allí entran constantemente inmigrantes rumanos y búlgaros, a los que por la inminente entrada a la UE de sus países tampoco se les exige visado. Además, las fuerzas de seguridad ha detectado que inmigrantes de otros países piden visados para otros países europeos y, una vez



► Dos subsaharianos se dirigen a una pensión de la calle de Sant Domènec del Call, en Barcelona, ayer.

Consuelo Rumí reconoce un fallo en el envío de africanos a BCN

► La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, reconoció un «fallo de coordinación» en el traslado de un grupo de 47 subsaharianos de Canarias a Barcelona. «Estamos estudiando lo ocurrido para que no se repita», dijo. Eduard Planells, delegado del Gobierno en funciones (el titular, Joan Rangel, está de vacaciones), dijo que la policía no fue avisada hasta poco antes de que el avión llegara a Barcelona, «por eso no hubo tiempo de activar el protocolo y avisar a una oenegé».

allí, se trasladan en avión hasta España, especialmente a pequeños aeropuertos como el de Girona, donde hay menos control de fronteras.

LLEGADAS EN AVIÓN // En la misma línea, un portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP) insistió en que la «política basura» hace que la atención se centre en los cayucos que llegan a Canarias, cuando el «verdadero problema» de la inmigración clandestina está «en los aeropuertos». Tras recordar que los ecuatorianos son el colectivo más numeroso en España tras los marroquíes, se preguntó: «¿En qué cayucos han venido todos los ecuatorianos sin papeles? En ninguno -respondió-. Vienen en avión y por Barajas».

Según el sindicato policial, otra vía de entrada para muchos inmigrantes procedentes de América Latina y de países del Este es la línea

férrea que enlaza París con Madrid.

El miembro del SUP, experto en inmigración, afirma que el 80% de los africanos que llegan a España de forma ilegal proceden de países donde se habla francés. Por eso, en su opinión, «no se quedan en territorio español, sino que continúan su camino hasta Francia, Bélgica o Luxemburgo», donde el idioma les supone un problema menos.

El portavoz del sindicato policial afirmó que, en lo que va de año, la Dirección General de la Policía ha trasladado a 18.000 sin papeles a varias autonomías. En esta cifra están incluidos los que proceden de Canarias (la mayoría), los de Ceuta y Melilla y los que son trasladados de una comunidad a otra.

El portavoz destacó que cuando los inmigrantes son trasladados a cualquier autonomía, se ponen a disposición de las oenegés. ▢

El colectivo que fue abandonado el lunes desaparece sin dejar rastro

► Los 47 inmigrantes que llegaron el lunes a Barcelona procedentes de Canarias parece como si se hubiesen esfumado. Las principales oenegés de Catalunya decían ignorar ayer el paradero de los recién llegados. «Deben de ser invisibles», ironizó ayer una asistente social.

► Profesionales de Cruz Roja y Cáritas aseguraron no haber atendido en sus comedores y centros de acogida a ninguna de esas 47 personas, a las que no se vio por la plaza de Catalunya. Las asociaciones de inmigrantes senegaleses en Catalunya también desconocían el paradero de sus compatriotas recién llegados. Los inmigrantes fueron dejados a su suerte el lunes en Barcelona sin el preceptivo asesoramiento y asistencia de 15 días por parte de las oenegés según el protocolo firmado por el Gobierno.

► El Cuerpo Nacional de Policía también desconocía ayer el paradero de ese colectivo, que llegó en un vuelo desde Las Palmas. «Nosotros los dejamos ir porque ya habían estado más de 30 días en un centro de internamiento en Canarias y no sabemos a dónde han ido», aseguró un mando policial. Otras fuentes policiales explicaron que muchos de ellos expresaron su deseo de ir a Francia, ya que hablan esa lengua, y es probable de que ya hayan conseguido su objetivo. Los agentes les facilitaron agua y comida, así como un plano de la ciudad, en la que figuraban los servicios de transportes. Lo único seguro es que los 47 africanos abandonaron el Centro de Internamiento de Emigrantes (CIE) de la Zona Franca y, por indicación de los propios policías, se dirigieron a la parada de la línea 21 y tomaron uno de los autobuses. JORDI CORACHÁN

El fenómeno de la inmigración



Las autonomías negociarán el reparto de 700 menores acogidos en Canarias

El Ejecutivo convoca en septiembre una reunión del Consejo Superior de Política de Inmigración

M. GONZÁLEZ / I. M. PARDELLAS
 Madrid / Santa Cruz de Tenerife
 Las comunidades autónomas negociarán en septiembre el reparto de los 700 menores no acompañados llegados a Canarias.

La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumi, confirmó ayer que en septiembre se reunirá el Consejo Superior de Política de Inmigración, que reúne a los consejeros autonómicos con competencias en la ma-

teria, para que Canarias apele a la solidaridad de las demás comunidades. La Xunta de Galicia, la Generalitat catalana y la Junta de Castilla-La Mancha se mostraron ayer dispuestas a acoger a menores llegados a las islas.

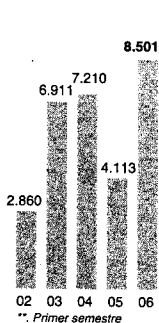
Traslados de inmigrantes

■ VUELOS DESDE CANARIAS

Aeropuertos de destino	04	05	06*	Total
Barcelona	0	2	1	3
Barcelona - Madrid	0	0	5	5
Barcelona - Madrid - Málaga	0	0	1	1
Madrid	20	73	18	111
Madrid - Málaga	50	5	4	59
Madrid - Murcia	40	0	1	41
Madrid - Murcia - Valencia	14	0	0	14
Madrid - Valencia	25	4	0	29
Málaga	3	7	4	14
Málaga - Murcia	5	3	0	8
Málaga - Valencia	1	0	0	1
Murcia	4	6	0	10
Murcia - Valencia	62	4	0	66
Valencia	3	5	0	8
Total	227	109	34	370

*. Hasta el 28 de febrero.

■ INMIGRANTES TRASLADADOS A LA PENINSULA



** Primer semestre

■ FONDO DE APOYO A LA ACOGIDA E INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES

Comunidad Autónoma	Miliones de euros
Andalucía	20,5
Aragón	5,8
Asturias	1,5
Baleares	5,2
Canarias	8,5
Cantabria	1,5
Castilla - La Mancha	7,2
Castilla y León	5,5
Cataluña	40,9
C. Valenciana	22,5
Extremadura	1,9
Galicia	2,6
Madrid	40,2
Murcia	11,1
Navarra	1,4
País vasco	1,6
La Rioja	2,0
Ceuta	0,8
Melilla	0,8

■ INMIGRANTES RECIBIDOS, SEGÚN LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS

Desde enero de 2006	Desde enero de 2006
No facilita datos	282
70 (en julio y agosto)	70
0 (sin centros de internamiento)	0
0 (sin centros de internamiento)	0
Unos 800	Unos 800
498	498
750	750
1.120	1.120
Unos 20	Unos 20
120 (desde febrero)	120
6.500	6.500
836	836
Unos 20	Unos 20
0 (sin centros de internamiento)	0
Sin datos	Sin datos
-	-
-	-

EL PAÍS

“Error de coordinación”

EL PAÍS. Madrid
 El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldeira, aseguró que las comunidades autónomas “conocen los traslados de inmigrantes desde Canarias a la Península”, aunque reconoció la Generalitat catalana no fue avisada de la llegada de 50 subsaharianos el pasado

lunes, “debido a un error de coordinación”, según informa Efe.
 La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumi, recordó que las comunidades autónomas aprobaron por unanimidad, el pasado 17 de febrero, el reparto de 182,4 millones de euros para acoger a in-

migrantes y recordó que en 2004 esta partida era de sólo siete millones. Respecto a las críticas de Madrid por la falta de información, dijo que esta comunidad es informada de los inmigrantes destinados a la misma, pero no de los que llegan a la capital en tránsito a otras comunidades.

Las comunidades del PP piden una reunión urgente con el Gobierno

EL PAÍS. Valencia
 La Comunidad de Madrid, el Gobierno valenciano, el de Murcia y el de Castilla y León, todos gobernados por el PP, solicitaron ayer una reunión urgente del Consejo Superior de Política de Inmigración, en el que se sientan el Ejecutivo central y las comunidades autónomas. El fin de ese encuentro sería coordinar a todas las administraciones con competencias migratorias para afrontar la masiva llegada de extranjeros a Canarias y su posterior traslado a la Península.

► **Comunidad Valenciana.** Si se produce esa reunión, la consejera valenciana de Bienestar Social, Alicia de Miguel, presentará propuestas para hacer frente al “caos del efecto llamada producido por la nefasta política de Zapatero”, que reclama “la intervención de los responsables políticos”. Una de ellas será la puesta en marcha de campañas divulgativas en los países de origen para trasladar a los inmigrantes “los auténticos requisitos para obtener los permisos de trabajo y residencia” y evitar que caigan en manos de las mafias. Otra iría encaminada a mejorar la coordinación entre las comunidades y el Gobierno, que “informa prácticamente sin antelación de los traslados desde Canarias y se desentien de de las personas que envía”.

► **Madrid.** La consejera madrileña de Inmigración, Lucía Figar, también se sumó a la petición de una reunión “política” en la que incluyó, además de a la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumi, y a las comunidades autónomas, al ministro del Interior. Su fin sería debatir cómo gestionar el traslado de inmigrantes. Figar también se quejó de no recibir comunicación oficial de todos los inmigrantes que llegan desde Canarias. “Nos dan información parcial”, puntualizó. Según la consejera, Madrid ha recibido a 6.500 de los 11.000 extranjeros trasladados desde las islas en lo que va de año. “Ayer mismo [por anteaer] llegaron 104, según fuentes policiales, y sólo nos comunicaron 20. Hoy [ayer] ha llegado otro centenar y nos han comunicado unos 70 por fax”, explicó.

► **Región de Murcia.** El presidente de Murcia, Ramón Valcárcel, aseguró que si se produce la reunión con el Gobierno central, la actitud de su Ejecutivo será cooperativa. “Con este asunto podríamos levantar el hacha de guerra y hacer causa política, pero estamos ante un problema humanitario y lo vamos a abordar desde la cooperación”, aseguró el presidente murciano, que acusó al Ejecutivo de enviar más inmigrantes a las regiones gobernadas por el Partido Popular.

► **Castilla y León.** Un portavoz de la Consejería de Presidencia acusó al Gobierno central de “falta de transparencia” en los traslados a la Península y pidió una reunión del Consejo Superior de Política de Inmigración para conocer los criterios con los que se elige el destino de los extranjeros.

Al contrario que los inmigrantes adultos, que son trasladados a la Península cuando están a punto de cumplir el plazo de 40 días de internamiento previsto por la Ley de Extranjería, si no se les repatriara antes, los menores se quedan en Canarias, bajo tutela de la Administración autonómica, hasta la mayoría de edad. El archipiélago tiene una capacidad máxima de acogida de 250 plazas, a través de un sistema de hogares, de 10 o 12 plazas cada uno, diseminados por las siete islas. Sin embargo, el censo oficial de menores extranjeros no acompañados ascendía ayer a 700.

Hasta 450 se encuentran reclusos en cinco grandes centros de emergencia en Gran Canaria y Tenerife, donde se cubren sus necesidades básicas en materia de salud, vestido, educación y manutención. Se estima que el 10% de los inmigrantes que llegan a Canarias son menores de 18 años, por lo que la cifra crece continuamente. Para hacerse una idea, la Comunidad de Madrid, con el triple de población, sólo tiene 310 menores en acogida. El Gobierno canario asegura que cada adolescente de 15 a 17 años le supone un desembolso de 30.000 euros al año.

El Estado, sin competencias

La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumi, asegura que es consciente de la gravedad del problema, pero advierte de que el Estado no tiene ninguna competencia en materia de tutela y custodia de menores, que corresponde en exclusiva a las comunidades autónomas. Por eso, su compromiso es “poner a disposición del Gobierno canario este órgano [el Consejo Superior de Política de Inmigración] para que pida la solidaridad de las demás comunidades y se estudie una posible distribución territorial”.

Rumi asegura que el Gobierno no va a realizar ninguna propuesta de distribución de menores, como hace con los adultos, y que se limitará a “ejecutar el acuerdo, si es que se alcanza”. La secretaria de Estado ni siquiera quiere aventurar si el Gobierno se ocupará del traslado en avión de los menores, ya que “habrá que atenerse a un protocolo, que tenga en cuenta los tratados internacionales en materia de protección de la infancia”.

Los estadounidenses ya dudan de que Irak tenga que ver con la guerra contra el terror

Bush anuncia que volverá a llamar a filas a 2.500 'marines' que ya están licenciados

JULIO VALDEÓN BLANCO
Especial para EL MUNDO

NUEVA YORK. Los estadounidenses perciben la guerra en Irak cada día más alejada de la denominada «guerra contra el terror», según una encuesta difundida ayer por el periódico *The New York Times* y la cadena de televisión CBS. El 51% de las personas preguntadas no ven la relación entre ambas realidades, un 10% más que el segmento de población que contestó lo mismo hace apenas un mes. Dicha respuesta contradice la retórica gubernamental, basada siempre en la supuesta conexión que la invasión de Irak guardaba con la lucha contra el terrorismo.

Aunque Bush y diversos senadores y congresistas republicanos han reiterado en las últimas semanas los argumentos en ese sentido, lo cierto es que la opinión pública comienza a dar muestras de hartazgo. Tras varios años de conflicto el goteo de cadáveres, la explosiva situación que atraviesa Irak y la falta de perspectivas fiables han terminado por desmoralizar a una ciudadanía que se pregunta por el sentido de una acción que el propio Bush declaró zanjada en 2003.

El 53% de los encuestados opina que ir a la guerra fue un error, frente al 48% que contestó lo mismo en julio. Asimismo un 62% opina que las «cosas han ido a peor» en Irak desde la intervención americana. Un 46% cree que la Administración Bush ha dedicado excesivos esfuerzos en dicha guerra, olvidando poner el énfasis en combatir el terrorismo, mientras que el 42% considera que el equilibrio entre ambos asuntos ha sido óptimo.

La encuesta también revela un auge de los candidatos demócratas con vistas a las elecciones del próximo otoño frente a sus rivales republicanos, si bien nadie se atreve a pronosticar lo que sucederá habida cuenta de la proverbial capacidad de recuperación demostrada por Bush y lo suyos en anteriores ocasiones.

Las críticas de McCain

Todo esto sucede en mitad de la polémica desatada por el senador republicano, y posible aspirante a la Casa Blanca en 2008, John McCain. Conocido por sus convicciones conservadoras y su firme defensa de la guerra de Irak,



Un policía inspecciona el interior de un vehículo tras una explosión en Bagdad. / REUTERS

McCain ha declarado que quizá el Gobierno se equivocó al vender el conflicto, pecando de optimista, en el mejor de los casos. «Hicieron creer a la gente que la guerra sería algo así como un picnic en la playa, y nada más lejos de la realidad». «Uno de los nuestros mayores errores fue subestimar el reto y los sacrificios que requeriría», añadió el senador, cuya fuerza moral dentro del partido resulta incuestionable.

Tras el final de la Guerra, declarado por Bush desde la cubierta de un portaaviones, más de 2.600 soldados estadounidenses han perdido la vida y muchos más han resultado heridos de gravedad. Tal vez por eso las últimas remesas de voluntarios presentan cifras paupérrimas, inaceptables para el ritmo

de flujo humano que la maquinaria bélica estadounidense requiere.

La falta de hombres ha propiciado que el presidente declarara ayer que más de 2.500 *marines* recién licenciados de la Guerra en Irak serían llamados a filas de nuevo, contradiciendo la tradición del Ejército.

El hecho de que muchos veteranos regresen al campo de batalla ha levantado suspicacias en los medios del país. Incluso ha vuelto a la palestra un viejo rumor que hablaría de posibles comentarios críticos por parte de los responsables militares hacia nuevas aventuras bélicas. Con medio Ejército desplegado por el mundo, sosteniendo dos guerras simultáneas, muchos cuestionan hasta dónde debe extenderse a las tropas.

El juicio contra Saddam Husein continuará el 11 de septiembre

BAGDAD. El Tribunal Penal Supremo de Irak decidió ayer posponer al 11 de septiembre el juicio contra el ex presidente Saddam Husein y seis altos cargos de su régimen por genocidio contra el pueblo kurdo durante la campaña *Al Anfal*, entre 1987 y 1988.

A la sesión de ayer, la tercera desde el comienzo del juicio el lunes, asistieron los siete acusados, incluido el primo de Saddam, Ali Hasan al Mayuid, conocido como «Ali el químico», así como los abogados de la defensa y de la acusación, según fuentes judiciales, informa Efe.

Poco después de la apertura de la sesión, el presidente de la Corte, el chii Abdala al Ameri, comenzó a escuchar el testimonio de tres mujeres kurdas sobre la operación *Al Anfal*.

La testigo Adiba Aula Baiz, de 45 años, relató su experiencia durante un bombardeo de la aviación iraquí contra la población de Bilisian, en la provincia de Suleimaniya, al norte del país, en el verano de 1987. La mujer explicó que después de que una bomba cayera en la parte trasera de la casa, el cuerpo de su hija comenzó a arder y su piel a despegarse. Otra testigo, Badria Said Jadar, de 56 años, habló sobre la frecuencia con la que los aviones bombardeaban Bilisian y los efectos sobre la población. «Algunos bombardeos nos hacían vomitar y nos lloraban los ojos, y otros debilitaban nuestra vista», explicó.

Esta campaña fue lanzada por el Ejército de Saddam entre 1987 y 1988 contra el Kurdistán iraquí, en el norte del país, y causó la muerte de decenas de miles de personas.